

REPÚBLICA DE PANAMÁ



Vista Número 536

MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Panamá, 5 de junio de 2009

Proceso contencioso
administrativo
de indemnización o
reparación directa.

Contestación de la demanda.
Se alega excepción de
irretroactividad de las
decisiones judiciales.

La firma Galindo, Arias & López, en representación de **Mireida De Gracia**, para que se condene al **Estado panameño**, al pago de B/.18,078.06, en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por el Órgano Judicial.

Honorable Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante ese tribunal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, con la finalidad de contestar la demanda contencioso administrativa de indemnización o reparación directa descrita en el margen superior.

I. Los hechos en que se fundamenta la demanda, los contestamos de la siguiente manera:

Primero: No consta; por tanto, se niega. (Cfr. artículo 833 del Código Judicial).

Segundo: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. Gaceta oficial 23220 de 5 de febrero de 1997).

Tercero: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. Gaceta oficial 23220 de 5 de febrero de 1997).

Cuarto: No consta; por tanto, se niega.

Quinto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Sexto: Es cierto; por tanto, se acepta.

Séptimo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Octavo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Noveno: No es un hecho; por tanto, se niega.

II. Disposiciones legales que se dicen infringidas y los conceptos de las supuestas violaciones.

La apoderada judicial de la parte demandante considera infringidos de manera directa, por omisión, los artículos 169 y 170 de la ley 6 de 1997; el artículo primero del decreto ejecutivo 42 de 1998; y el artículo 1645 del Código Civil, este último modificado por la ley 18 de 31 de julio de 1992, según los conceptos confrontables en las fojas 18 a 24 del expediente judicial.

III. Descargos de la Procuraduría de la Administración, en representación de los intereses de la institución demandada.

Conforme expone la recurrente en el libelo de la demanda contencioso administrativa de indemnización interpuesta en contra del Estado, ella inició labores en el desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación hasta que fue reasignada a una de las empresas que, en virtud de la ley 6 de 1997, surgieron producto de la reestructuración de la actividad eléctrica. (Cfr. foja 16 del expediente judicial).

Indica además, que de acuerdo con lo estipulado en los artículos 169 y 170 de la ley 6 de 1997, aquellos trabajadores que se acogieran al plan de retiro voluntario que implementó el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación por razón de la reestructuración del sector eléctrico, tendrían derecho al pago de todas sus prestaciones y una suma adicional de 6.8 semanas para aquellos que hubiesen laborado hasta diez años; 2 semanas por cada año por haber trabajado entre diez a veinte años; 2 y media semanas

para los trabajadores que contaran un período laboral entre veinte a veintiséis años; y 3 y media semanas por cada año resultado de más de veintiséis años de servicios. (Cfr. fojas 16 y 17 del expediente judicial).

La recurrente también señala que laboró en el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación por más de diecisiete años y únicamente se le pagaron sus prestaciones y la compensación económica adicional con fundamento en el decreto ejecutivo 42 de 27 de agosto de 1998 y el artículo 225 del Código de Trabajo, suma que considera inferior a la estipulada en el artículo 170 de la ley 6 de 1997. (Cfr. foja 17 del expediente judicial).

Igualmente sustenta su pretensión en el hecho que ese Tribunal, mediante sentencia de 5 de mayo de 2006 declaró nula, por ilegal, la frase "indemnización según el artículo 225 del Código de Trabajo", que estaba incluida en el artículo tercero del decreto ejecutivo 42 de 27 de agosto de 1998, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y alega que en virtud de lo dispuesto en el decreto ejecutivo 42 de 27 de agosto de 1998, cualquier diferencia que surgiera del cálculo de las liquidaciones de los ex trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, es responsabilidad del Estado.

Esta Procuraduría se opone a los planteamientos de la recurrente, pues tal como se aprecia del contenido de la demanda bajo examen, la solicitud de la parte actora se encuentra dirigida a obtener el pago de un pasivo laboral, en

concepto de liquidación de prestaciones económicas derivadas de lo dispuesto en la ley 6 de 3 de febrero de 1997, que no pueden ser objeto de debate en el presente proceso contencioso administrativo de indemnización, cuya finalidad es establecer la cuantía de los daños y perjuicios que supuestamente le fueron causados por un acto administrativo, tal como lo dispone el numeral 8 del artículo 97 del Código Judicial.

En virtud de lo anterior, este Despacho es del criterio que ante la evidente ausencia de un daño causado o generado por la referida entidad estatal, los cargos de infracción alegados por la parte actora con relación a los artículos 169 y 170 de la ley 6 de 1997; el artículo primero del decreto ejecutivo 42 de 1998; y el artículo 1645 del Código Civil, modificado por la ley 18 de 31 de julio de 1992, resultan carentes de asidero jurídico y, como consecuencia de ello, solicita a ese Tribunal que declare que el Estado panameño no está obligado al pago de B/.18,078.06, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, conforme lo demanda la firma forense Galindo, Arias & López, en representación de Mireida de Gracia.

IV. Pruebas:

1. Se aduce la copia autenticada del expediente administrativo que corresponde a la demandante y que reposa en los archivos de la institución demandada.

2. Se objetan las pruebas presentadas por la parte actora, identificadas con los números del 3 y 4 en el libelo de la demanda, por no cumplir con el requisito de autenticidad exigido en el artículo 833 del Código Judicial.

V. Derecho.

Se niega el invocado en la demanda.

VI. Cuantía.

Se niega la indicada en la demanda.

Excepción de irretroactividad de los efectos de las decisiones judiciales.

Con relación a los cargos que se expresan en la demanda, esta Procuraduría estima que el hecho que ese Tribunal haya dictado la sentencia de 5 de mayo de 2006, antes mencionada, y declarado la nulidad de las ya citadas normas reglamentarias, no puede dar lugar a que la demandante considere que el efecto de esa decisión judicial tenga carácter retroactivo, toda vez que los efectos de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sólo rigen hacia el futuro, tal como lo ha señalado ese Tribunal en las sentencias de 23 de marzo de 1999, de 14 de junio de 1995 y de 13 de mayo de 1999.

Por tal razón, los cargos de ilegalidad argumentados por la parte actora resultan carentes de fundamento, pues la entidad demandada actuó de conformidad con la norma vigente en la fecha en la cual la demandante terminó su relación laboral con el desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

En ese sentido, los fallos antes mencionados, en su parte medular indican lo siguiente:

"Sin embargo las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo tienen efectos hacia el futuro y no hacia el pasado, y como las Resoluciones No. 31 y 31-1 de 20 de abril de 1995 fueron proferidas,

fundamentándose en el Resuelto No. 397 de 1993 modificado por el Resuelto No. 153 de 1994, con anterioridad a la sentencia de 7 de mayo de 1998, entonces las situaciones jurídicas surgidas durante la eficacia del acto declarado ilegal, no pueden ser invalidadas por la declaratoria de nulidad." (Sentencia de 23 de marzo de 1999, Registro Judicial Mes de Marzo de 1999, págs. 571-575).

"... la simple declaratoria de nulidad, es decir, las que se decretan dentro de las demandas Contencioso Administrativo de Nulidad como acción popular, producen efectos ex-nunc, hacia el futuro, más no ex-tunc, hacia el pasado, por lo que sus consecuencias no se retrotraen al período o tiempo anterior a la publicación de la declaratoria de nulidad..." (Sentencia de 14 de junio de 1995, Citada en sentencia de 13 de mayo de 1999, Registro Judicial Mes de Mayo de 1999, pág. 468).

"... y los trámites que la autoridad demandada siguió para otorgarla, fundamentándose ambos en el Resuelto No. 397 de 1993, fueron legales hasta tanto no fue declarada su ilegalidad por esta Corporación y los efectos que produjo en el pasado al crear derechos subjetivos a favor de personas naturales o jurídicas, como lo es el caso de la Resolución No. 31-1 de 1995, no pueden ser revocados, sino que mantienen su validez y subsisten en el tiempo." (Sentencia de 13 de mayo de 1999, Registro Judicial Mes de Mayo de 1999, págs. 465-470).

Este Despacho desea aclarar, que si bien es cierto el argumento en que se fundamenta la presente excepción de irretroactividad de los efectos de las decisiones judiciales, ya fue considerado por el Magistrado Sustanciador como parte del fundamento que utilizó en el auto de 13 de noviembre de 2006, mediante el cual no admitió la demanda, no lo es menos

que, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de dicho auto, el resto de esa Sala, antes de revocarlo y admitir la demanda, puso de relieve al dictar la resolución de 12 de febrero de 2009, que los criterios vertidos por el Sustanciador **deberían ser examinados o evaluados con más profundidad al momento de resolverse de fondo el negocio bajo examen**, de ahí que podamos concluir que nuestros planteamientos en torno a esta excepción todavía son del todo atendibles.

Por lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente a ese Tribunal, que al pronunciarse sobre el fondo de este asunto, con fundamento en el principio de irretroactividad de los efectos de las decisiones judiciales en materia de nulidad de los actos administrativos, declare probada la presente excepción y, en consecuencia, desestime la demanda de indemnización propuesta por Mireida de Gracia en contra del Estado panameño.

Del Honorable Magistrado Presidente,

Nelson Rojas Avila
Procurador de la Administración, Encargado

Alina Vergara de Chérigo
Secretaria General, Encargada